

Santiago, catorce de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos antecedentes N° 226.192-2023 provenientes del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso en la causa RIT N° 260-2023, se dictó sentencia definitiva el trece de septiembre de dos mil veintitrés, que condenó a Leyla Amado Vásquez a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 UTM, más accesorias legales, como autora del delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley N° 20.000.

En contra de esa decisión, la defensa de la acusada interpuso recurso de nulidad, el que fue admitido a tramitación y conocido en la correspondiente audiencia.

Considerando:

Primero: Que la única causal que interpone la defensa consiste en la contravención sustancial de derechos o garantías aseguradas por la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales ratificados por Chile, contemplada en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, concretamente, alega que se vulneró la garantía al debido proceso al admitir y valorar prueba obtenida en contravención a normas constitucionales y legales.

Sostiene que el ingreso y registro efectuado por la policía en el domicilio de la acusada se practicó con infracción de lo dispuesto en los artículos 7, 93 letras b) y g), 205 y 206 del Código Procesal Penal. Explica que no se informó a la acusada de sus derechos de guardar silencio, ser asistida por un abogado y de negarse a autorizar la entrada y registro de su domicilio, configurándose con ello una



vulneración a sus garantías fundamentales, específicamente a las previstas en los artículos 19 numerados 3 inciso 6°; 5 y, 7 de la Constitución Política de la República; 8 N°2 letras e) y g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 N°3 letras d) y g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Solicita que se acoja la mencionada causal de nulidad, anular el juicio y la sentencia, y que se ordene la exclusión de toda la prueba obtenida con violación a derechos fundamentales.

Segundo: Que el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal permite la declaración de nulidad total o parcial del juicio y de la sentencia cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento del fallo, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías aseguradas por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

En el caso en estudio, se reclama que la vulneración de los mencionados derechos aconteció en la etapa de investigación, específicamente al momento de la entrada y registro del domicilio de la acusada, desde que no fue informada de los derechos que le asistían en calidad de imputada. Enseguida, asevera que la prueba ilícitamente obtenida fue valorada en la sentencia para sustentar la condena, lo que refuerza la vulneración al debido proceso.

Tercero: Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso de nulidad deducido por la defensa, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto,



confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

Cuarto: Que, de otro lado, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley le entrega al personal policial, así como lo referido al respeto del debido proceso y la intimidad, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita, tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema, debe ser excluido del mismo.

Quinto: Que, en relación a las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales de la acusada, como denunció su defensa.

Sexto: Que, como se ha consignado en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa, las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un



cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178-17, de 13 de abril de 2017; N° 9167-17, de 27 de abril de 2017; N° 20286-18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126-18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881-19, de 25 de julio de 2019).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo, establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

Séptimo: Que las disposiciones recién reseñadas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de



indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado -y sometido a control jurisdiccional- en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

Octavo: Que a fin de dirimir lo planteado en el recurso, resulta necesario estarse a lo asentado por los jueces del fondo al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal. Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

Noveno: Que para un mejor análisis del motivo de nulidad que se alega, conviene traer a colación estos antecedentes:

- 1.- Los hechos que el tribunal del fondo tuvo por acreditados se originaron con la entrada y registro en el domicilio de la acusada sin autorización judicial previa, sino solo con la autorización del coimputado Pablo Patricio Rosas González;
- 2.- El 31 de marzo de 2021 se tomó conocimiento por la patrulla de Carabineros de la Primera Comisaría Sur de Playa Ancha que en el domicilio ubicado en calle Aguayo 365 casa 8 Playa Ancha, las personas



que habitaban dicho inmueble, se dedicaban al cultivo de cannabis y al tráfico en pequeñas cantidades de esta sustancia;

3.- Ese día, aproximadamente a las 12:35 horas, personal de Carabineros, se constituyó en el mencionado domicilio donde se encontraban los acusados Pablo Patricio Rosas González y Leyla Amado Vásquez, procediendo el primero a autorizar el ingreso voluntario a su domicilio, instante en que la acusada Amado Vásquez, se dirige al baño y lanza al inodoro droga, ingresando personal policial, comprobando que en la tasa del baño, aun existían 0,44 gramos netos de *cannabis sativa*. Posteriormente, al registro del inmueble, se constató que los acusados mantenían, poseían y guardaban, sin la competente autorización, 28,83 gramos netos de *cannabis sativa*, 6 comprimidos de Clonazepam, dos balanzas digitales y tres teléfonos celulares;

Décimo: Que, a la luz de lo que se denuncia por esta vía, y lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde analizar la legitimidad que tiene la autorización de ingreso prestada por uno de los acusados. En efecto, del mérito de los antecedentes, resulta que la noticia *criminis* que dio origen a la investigación fue recibida por los funcionarios policiales a través de una denuncia que indicaba que en el domicilio ubicado en calle Aguayo N° 365, casa 8, Playa Ancha, Valparaíso, se vendían drogas por parte de sus residentes. Dicha denuncia constituye una verdadera imputación para quienes se encontraban a cargo del inmueble señalado, puesto que se les atribuía la comisión de un determinado delito.



En dicho contexto, el artículo 7 del Código Procesal Penal establece que la calidad de imputado se adquiere desde la primera actuación del procedimiento dirigida en su contra, lo que incluye cualquier diligencia de investigación realizada por la policía o el Ministerio Público en la que se le atribuya responsabilidad en un hecho punible. En este caso, la denuncia señalaba directamente la existencia de un delito de tráfico de drogas en ese domicilio, lo que lo que se sigue que cualquier persona que estuviera al interior del inmueble ya tenía la calidad de imputado a la llegada de los funcionarios policiales.

Undécimo: Que, en consecuencia, los funcionarios de Carabineros al arribar al domicilio de los acusados debieron otorgar necesariamente a las personas que se encontraban al interior del inmueble, el tratamiento correspondiente a su calidad de imputados, lo que implica que antes de solicitar cualquier autorización para ingresar, debieron informarles de manera expresa sobre dicha condición de imputados conforme lo dispone el artículo 93 letras b) y g) del Código Procesal Penal. Entre estos, se encuentra el de guardar silencio, de ser asistidos por un abogado, de no auto incriminarse, así como el derecho a no autorizar el ingreso al domicilio sin previa orden judicial.

Duodécimo: Que del mérito de los antecedentes ventilados en el juicio y consignados en el fallo impugnado no se encuentra acreditado que los funcionarios policiales hayan informado a los ocupantes del domicilio, antes de su ingreso, acerca de los derechos que les asistían conforme a la citada regla, vicio legal que impide otorgarle validez alguna a la autorización otorgada por el coimputado Pablo Patricio Rosas González a la policía y, por extensión, a la evidencia obtenida a partir de ella desde que no se trata de un caso de hallazgo



accidental de evidencia incriminatoria, vulnerándose con ello la garantía constitucional del debido proceso que consagra el artículo 19 N°3 inciso 6° de la Carta Fundamental. En consecuencia, toda la prueba obtenida en virtud de dicha autorización irregular debe ser excluida del proceso, conforme a la doctrina de la prueba ilícita y sus efectos expansivos.

Por estas consideraciones y, de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 384, 386 y 387 del Código Procesal Penal, se resuelve:

I.- Que **se acoge** el recurso de nulidad deducido por la defensa de Leyla Amado Vásquez, anulándose la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil veintitrés en la causa RIT N° 260-2023, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso.

II.- Que, asimismo, se invalida el juicio oral que le sirvió de antecedente.

III.- Que se ordena la exclusión de toda la prueba obtenida con infracción a garantías fundamentales del auto de apertura dictado el 29 de junio de 2023.

IV.- Que, corregido el auto de apertura, se dispone la celebración de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la ministra (s) señora Catepillán.

Rol N° 226.192-2023





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., Los Ministros (As) Suplentes Eliana Victoria Quezada M., María Carolina Uberlinda Catepillán L. y Abogada Integrante Pía Verena Tavolari G. Santiago, catorce de febrero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a catorce de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

